

## Por la vida la lucha que importa

Vandana Shiva

**GUATEMALA:  
EL GENOCIDIO  
QUE SÍ FUE  
MARTA ELENA  
CASAUS ARZÚ**

**OJARASCA  
EN ECUADOR:  
¿QUIÉN MATÓ A LOS  
TAROMENANE?**

**LA TARAHUMARA  
Y NUESTRO MAÍZ  
GUILLERMO PALMA**

**POLICÍA COMUNITARIA  
DE GUERRERO:  
RENOVAR EL CONSENSO**

**Umbral:  
CON SU ENORME  
PECHO AGRARIO**

***El guardián de las palabras*  
Jorge Miguel Cocom Pech**

***El tambor y la estrella*  
Mario Payeras**

**Los mayas modernos  
de Macduff Everton**



Mujer maya vestida para bailar, acrílico sobre masonite, 1999. Óleo: Maya González







# Matanza de pueblos en aislamiento en la Amazonía ecuatoriana

## QUIÉN TEME A LOS TAROMENANE

Ramón Vera Herrera, Quito, Ecuador

UN CRIMEN CONFUNDE a la sociedad ecuatoriana —que pone el grito en el cielo y aparta la vista de inmediato. Gilberto Nenquimo, vicepresidente de la nacionalidad waorani (Nawe), fue uno de los primeros en dar la noticia del ataque de un grupo waorani contra un grupo en “aislamiento voluntario”, o “no contactado” el 29 de marzo.

“Después de haber consultado a una persona que participó en el ataque, tengo información de que hay 18 muertos, entre hombres y mujeres mayores”, dijo Nenquimo. Según AFP, la fuente de Nenquimo participó en el ataque a los taromenane y contó que “los agresores consiguieron cartuchos para escopetas y posiblemente armas en un mercado del caserío de Pompeya, en la provincia de Orellana”. Otras fuentes afirman que los asesinados podrían sumar treinta, y que se trata de una venganza por el asesinato del guerrero Ompore Omeway y su esposa Bogueney, ambos mayores, el 5 de marzo, cerca de Yarentaro y de una zona de explotación petrolera. Lo extraño es que según la misma nota de AFP y diversas autoridades ecuatorianas, “la Fiscalía no tiene certeza sobre la existencia de cuerpos o elementos que permitan demostrar que hubo una matanza”.

Pero la redacción del *Sol de Pando* pone el dedo en la llaga al apuntar que hay ingeniería de conflictos en la guerra que desde 2003 se desató entre grupos de la nacionalidad waorani contactados y los grupos tagaeir-taromenane (de algún modo parte del pueblo waorani, aunque con otras ascendencias), empeñados en ocultarse en lo profundo de la selva para evitar trabar contactos. Para el *Sol de Pando*, “lo preocupante de los enfrentamientos entre los indígenas del Parque Yasuní es que se originan en intereses creados por empresas mineras y petroleras que intentan establecerse”, e insistió en que “la iglesia católica denunció que los proyectos de producción minera y petrolera en la Amazonía ecuatoriana son los causantes de las recientes y trágicas muertes en las comunidades waorani y taromenane. Los waorani estarían siendo armados con rifles y escopetas, y premiados con utensilios y herramientas, por parte de empresarios madereros para exterminar a los taromenane no contactados que defienden aguerridamente sus codiciados bosques”. Repsol YPF, Petrobel, Perenco y Petrobras realizan prospección, abren carreteras o de plano explotan en inmediaciones de Yasuní, que en teoría cuenta con la protección del Estado contra cualquier proyecto extractivista o de colonización.

Efectivamente, el Estado tiene el deber de acatar las medidas cautelares de la Corte Interamericana para defender a los grupos en “aislamiento voluntario” (que datan de mayo de 2006), y en el artículo 57 de su Constitución afirma que “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva”, por lo que adoptará medidas para garantizar la vida de estos pueblos, “hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos”. Sin embargo, como afirma el asesor jurídico de la Comisión Ecuémica de Derechos Humanos, César Duque, “no se ha creado una normativa que permita la aplicación de las garantías en ese marco de autonomía indígena”.

En el misterio que rodea el crimen parecería que se busca provocar una animadversión contra los grupos en aislamiento forzado (más que voluntario), haciéndolos ver como salvajes propensos al asesinato y la venganza, mientras se fabrican las condiciones y los pretextos

para penetrar en su territorio (llamada Zona Intangible) y romper de una vez por todas el obstáculo que representa su condición de pueblos refugiados, en su propio ámbito.

A principios de marzo, tras el asesinato del jefe Ompore, la Organización de la Nacionalidad Waorani de Orellana (ONWO) ya alertaba de todo esto y exigía al Estado ecuatoriano: “frenar todo intento por utilizar los hechos de sangre que han cobrado la vida de miembros de familias waorani en contacto, como excusa para perpetrar un contacto forzado que implicaría muerte, despojo territorial y el posible exterminio entre waorani; retomar lo expuesto por ONWO a diversas instituciones para que se frene la penetración de colonos, nuevas infraestructuras y vías, sembríos no tradicionales waorani e incluso el corte de madera legal e ilegal como se comprobó en 2012, y que se cumpla con la Constitución y la ley (garantizando que el territorio waorani donde habitan familias en contacto y en aislamiento, sea intangible a actividades de colonización y extractivas)”.

Los conflictos no ocurren solamente entre clanes waorani y taromenane, sino centralmente con prospectores, ganaderos, madereros, petroleros, colonizadores, evangelizadores, agroindustrias, constructores de carreteras y el turismo. Contra ellos se han dirigido los ataques (muy diferentes de las disputas ancestrales) desde los años setenta, como señala José Proaño. Ataques que en su mayoría ocurren en los límites del territorio waorani, en la frontera extractiva y agrícola, y son dirigidos contra los *cowodi*, aquellos que no son waorani.

Pero desde el Estado ecuatoriano no parece haber voluntad de defender a los waorani. De acuerdo a un editorial de Acción Ecológica, desde febrero de 2010 “el entonces titular de Petroamazonas, hoy encargado del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, dijo ante los medios que no había evidencia contundente de la presencia de pueblos aislados y que más bien podrían ser hechos prefabricados”. Con lo cual condicionó la política dirigida a los pueblos en aislamiento voluntario, al insinuar que eran un invento de la sociedad civil.

El recuento de Acción Ecológica (una de las organizaciones con más trabajo en la región) nos deja ver que la expansión petrolera avanza justo en la “parte central del territorio ancestral” waorani —en esos sectores cuadrículados que infamantemente se nombran Bloques numerados y circundan la Zona Intangible. El Bloque 16, operado por Repsol (España)-Nomeco (China), es donde ocurrió el ataque al jefe Ompore Omeway y su esposa, y desde donde salieron tres expediciones que culminaron con la matanza reciente de gente en aislamiento.

Para Acción Ecológica el territorio en disputa entre waorani y pueblos en aislamiento está bajo control de las petroleras, que han logrado acuerdos con algunos waorani para una ocupación del territorio “con mayor concentración poblacional en torno a las carreteras que atraviesan el bloque, consumo de alcohol, armas de fuego, y diversas formas de dependencia, incluyendo dinero en efectivo”. Los tagaeri “huyeron del contacto forzado por el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), cuando éste abrió el paso para las operaciones petroleras de Texaco. Los tagaeri y los taromenane, al parecer, siempre vivieron transitando en el Yasuní, entre Ecuador y Perú. Ambos pueblos se declararon libres y rechazaron cualquier contacto con culturas ajenas a la suya; ambos tienen derecho a mantener esta condición. El impresionante ruido, la contaminación, las enfermedades, la competencia, la manipulación a las comunidades, la militarización, son el telón de fondo de la actual crisis en la zona”.

Según Miguel Ángel Cabodevilla, tal vez el investigador que más conoce a los waorani, “los tagaeri son una escisión de grupos waorani bien conocidos, mientras que los taromenane son grupos de un mismo tronco separados al menos desde hace más de un siglo de los waorani, y desde fines del siglo XIX no han tenido una relación amistosa”. Desde fuera, se ha terminado por hacerlos un mismo grupo, el de los pueblos “no contactados”, “en aislamiento voluntario”, “pueblos ocultos”, todos términos fallidos para una condición de arrinconamiento feroz.

Para las investigadoras Fernanda y Sol Vallejo, los tagaeiri-taromenane, como los propios waorani, siempre fueron clanes “nómadas” que se movían en un amplio compás de espacio-tiempo tejiendo relaciones entre los clanes y con toda la selva con la que convivían: recolectaban, cazaban, pescaban, pastoreaban y sembraban, conformando pueblos que con el paso de los milenios definieron su territorio: un ámbito de recorridos, relaciones y sentido en común.

Lo real es que no hace más de cincuenta años los waorani iban y venían de Colombia y Perú y continuaron en este trasiego que les permitía un manejo eficaz y sabedor de sus territorios, hasta que llegaron las petroleras, la minería, las monterías de caucho y de madera y más recientemente el narcotráfico —cerrando rutas o haciéndolas intransitables por sus obras y sus contaminaciones (destaca el ruido, que aleja los animales de sus cotos tradicionales).

En tales recorridos, los clanes amazónicos se topaban entre sí; o se entendían e intercambiaban dones [contribuían al cuidado mutuo del territorio], o se descontraban y combatían aguerridamente.

El ILV entró en los años cincuenta con gran empuje y abrió centros de colonización, reducción, modernización y evangelización, lo que fragmentó las comunidades y promovió la penetración de las corporaciones. Cada avanzada de extensionistas, prospectores y funcionarios les fue dejando trochas y senderos abiertos al interior de sus territorios. Pero la entrada a la floresta se demoró porque la selva “es jodida” y tiene sus defensas, además de que a ojos de todo mundo los amazónicos eran unos salvajes y lanceaban a quienes osaban penetrar sus territorios. Siempre habían sido guerreros y no iban a dejarse vencer o convencer así nomás.

El ILV comenzó a llevarse niños y niñas de las comunidades para “civilizarlos”, con lo que el contacto fue raptó. La única salida que dejaron a las comunidades que no aceptaban este “trato civilizado” fue sumergirse más en la selva y volverse más intratables. Efectivamente. En varias ocasiones lancearon a misioneros y sus familias, y a invasores de toda calaña. Esta actitud irreductible se tradujo en años recientes en un aislamiento que se parece más al de “un tigre enjaulado que al de pajaritos libres que vuelan por el bosque”, como dijera Milagros Aguirre, directora de la Fundación Labaka. Y así resistieron con lanzas las armas de fuego y los helicópteros, logrando el respeto frágil de un territorio muy reducido. De los 2 millones de hectáreas de su territorio ancestral “entre la margen derecha del río Napo y la izquierda del Curaray”, apunta el investigador Napoleón Saltos, su territorio se redujo (por el embate de las concesiones petroleras, madereras, agrícolas y de colonización) a unas 612 mil hectáreas.

El Estado remachó que el subsuelo sería administrado por él mismo: “los adjudicatarios no podrán impedir o dificultar los trabajos de exploración y/o explotación minera e hidrocarbúrrifera que realice el gobierno nacional y/o personas naturales o jurídicas legalmente autorizadas”. Y el ILV siguió penetrando en diferentes puntos de la selva, estableciendo poblamientos.

Ya para este momento, en las vueltas de la peregrinación ancestral por su territorio se dieron cuenta que muchas rutas y pasos estaban cerrados y que su ámbito se seguía reduciendo. Los clanes mantuvieron el manejo itinerante de su territorio aunque en versiones más y más reducidas hasta llegar a la noción de “tambos”: regiones pequeñas por donde peregrinan en el año y que cuentan con sitios de agua, siembra, habitación, cacería y recolección, para después retornar a su asentamiento más fijo. Pero las fricciones y los enfrentamientos adentro fueron más frecuentes con záparas, sequoyas y awas.

Entre los waorani contactados existen núcleos en resistencia, en particular mujeres, que no se dejan engatusar, y núcleos comunitarios que defienden su territorio en los espacios que pueden, pero también hay núcleos que terminaron siendo funcionales a los intereses de petroleras, mineras y madereras, que conformaron, como afirma Napoleón Saltos, “cuadrillas armadas, algunas de ellas con los mismos indígenas” para enfrentar a los waorani que defienden sus territorios, y llegaron al punto de crear organizaciones de waorani que realizan convenios de “colaboración” y “gestiones gubernamentales que respalden sus operaciones”. Comenzó a haber jefes de clanes sometidos y vendidos a cambio de un peaje por entrar o cruzar el territorio concedido a las petroleras. De pronto Repsol estaba a cargo de regiones del territorio y “del ambiente”. Y les daba de comer: muchos waorani abandonaron recorridos y sus artes ancestrales, y se sentaron a esperar arroz y atún de Repsol.

Según Saltos, en el territorio ancestral waorani se han abierto ocho campos y siete bloques petroleros de 200 mil hectáreas cada uno. Cerca de 492 mil hectáreas, casi la mitad del Parque Yasuní, entregadas a las petroleras. “La parte sur no ha sido concesionada gracias a que fue declarada Zona Intangible en 1999 y delimitada en el año 2007”. Esto, con la colaboración de las Fuerzas Armadas que entre 2003 y 2005 firmaron contratos con Repsol para darle seguridad, y que a partir de 2007 tienen un departamento de “seguridad petrolera” con el que el gobierno de Correa decretó militarizar los campos petroleros en la Amazonía.

Hay quien afirma que si los tagaeiri-taromenani se hicieron objeto de una venganza porque mataron a Ompore y su esposa, esto es paradójico porque habrían matado justo a una de las autoridades morales que permitía y propiciaba la relación entre contactados y no contactados —y uno de los pocos waorani que mantenía una relación de cercanía y entendimiento con los taromenani. Se perdió así uno de los amortiguamientos más reales que tenían unos y otros. Lejos de estar apegada a los ritos guerreros waorani, la matanza que “vengó su muerte” fue perpetrada con armas de fuego, y fue recibida con gran escepticismo por las autori-



Herculana baila con Darío en su cumpleaños, Cancún, Quintana Roo, 2001. Fotos: Macduff Everton

## El tambor y la estrella

Mario Payeras

Lo nuevo de todo esto

está en que ya no podemos ser felices como antes.

La mañana que entramos a este lugar de cedros y silencio

habíamos renunciado al tambor y a la estrella

y estábamos seguros de que ya no habría tiempo para saber,

por ejemplo,

si por fin el espíritu tiene el olor a caballo dormido

que le atribuimos durante la niñez.

Es una manera de decir que la felicidad envejece también

y que ahora debemos conformarnos

con lo que se contenta el más pobre de nuestros compañeros.

O sea: con el agua y el fuego,

como los viejos filósofos,

con la seguridad de que la materia se halla en movimiento

y con nuestra condición de hormiguitas

abocadas al gobierno del mundo.

Si tenemos bengalas

soltémoslas en el cielo de todos.

Y que no sea la muerte

con su malentendida pirotecnia subterránea

la que nos lleve a revivir para nosotros solos

las noches iluminadas.

Mario Payeras, uno de los poetas, filósofos y militantes de la izquierda guatemalteca y latinoamericana más destacados, nació en Chimaltenango en 1940 y murió en México en 1995. “El tambor y la estrella” fue tomado de un legajo mecanografiado que alguna vez nos hicieron llegar manos amigas y que después sería *Poemas de la Zona Reina* (1972-1974), publicado después de su muerte por Artemis & Edinter, Guatemala, 1997.

dades ecuatorianas —lo que no deja de extrañar de un Estado que responde agresivo y puntilloso ante todo lo que le molesta, mientras que en este caso sigue sin ver los cuerpos ni constatar el número de los muertos.

Al mismo tiempo, en Ecuador, la animadversión contra waorani y tagareres crece entre la opinión pú-

blica desinformada. Más protestas hubo en las redes sociales por unos perros que mataron en Guayas para que no estorbaran en un campeonato de surf en Montañita, en el balneario de Santa Helena, que por la matanza de taromenane ☞



Veva y Alicia ven la TV, Chichimilá, Yucatán, 1986



# LAS FASES DEL GENOCIDIO Y LA PECULIARIDAD GUATEMALTECA

✂ Marta Elena Casaus Arzú ✂

EL GENOCIDIO NO es simplemente un acto exterminador aislado contra un pueblo o grupo religioso, sino un proceso paulatino de destrucción de los sujetos y deshumanización de las víctimas hasta llegar a su exterminio físico. Para Daniel Feirstein el proceso genocida tiene varias fases. La primera, cuando se comienza a construir a quien se considera como otro en negativo, estableciendo tópicos o estereotipos para justificar su exclusión o eliminación. En Guatemala esta fase ya

estaba prácticamente establecida por el prejuicio racial contra los indígenas. Sólo había que añadirle subversivo, comunista, guerrillero, no normalizable.

Enseguida se generaliza el estigma de manera absoluta: “Todos los indios son subversivos o sujetos de subversión”, son “violentos y una amenaza para la Nación”. La intención es volverlos “normales”, “borrarles lo ixil y ladinizarlos”. Si no quieren, se les destruye. En esta primera fase, la imagen negativa del indígena se aprende en las casas, en las escuelas del ejército, kaibilizando la guerra. Los testimonios de kaibiles en el juicio y su adoctrinamiento contra los indígenas son una buena prueba de la ideología y prácticas racistas.

La segunda fase es la campaña de hostigamiento porque el “otro” es el culpable de los males. En Guatemala, el indígena se convierte en “soporte de la guerrilla”. Los diversos planes (Victoria, Firmeza, Sofía) se inician con la persecución del “otro” y el prejuicio hace que se consideren todas las comunidades ixiles como subversivas. Se les identifica como enemigo interno: “hay que cortar la semilla del mal”.

En otros genocidios, como el judío o el bosnio, se intenta aislar espacialmente a la población y concentrarla en guetos, campos de concentración o de refugiados para apoderarse de sus tierras y bienes. En Guatemala fue previo porque los ixiles y achíes ya estaban aislados en las montañas y caseríos. En los planes y los diagnósticos de los mandos se decía que su aislamiento permitía la “intervención roja”.

El asilamiento espacial y la concentración de aldeas estratégicas se produjeron después del exterminio. Allí se dan los principales desmanes de violación, servidumbre sexual, tortura, vejaciones, con el fin de “normalizarlos”. Así empieza la fase de etnocidio, cuando entran a funcionar otros planes como “Techo, tortilla y trabajo” o “Fusiles y frijoles”, al intentar arrebatarles su cultura, su traje, su religión.

El Plan Sofía habla de capturar y concentrar en los campos a los sobrevivientes para “borrarles lo ixil”. En estos espacios de aislamiento y concentración volvían a sufrir torturas, vejaciones e insultos: “indias de mierda”, “coches”, “vacas”. Las mujeres eran violadas sistemáticamente por la tropa y los sargentos, generando un sentimiento de impotencia y vulnerabilidad. Contrariamente a otros genocidios, como el judío o el de Bosnia, el aislamiento aseguraba mayor silencio e impunidad. El aislamiento espacial venía después, con los sobrevivientes, a los que se metía en destacamentos, aldeas estratégicas o fincas como La Perla, para controlarlos, y los obligaban a trabajar en los destacamentos y someterse a servidumbre sexual.

En varios planes y campañas se emprende el exterminio masivo de la población y la quema de enseres y animales. Es el asesinato indiscriminado de mujeres, ancianos y niños, como hemos escuchado repetidamente en los testimonios presentados en el juicio contra Efraín Ríos Montt.

El plan Sofía habla de aniquilación total, de destruir a la población y sus lazos comunitarios, “llevar a cabo una campaña psicológica contra la población ixil”. Como se ha visto por los testimonios que hemos escuchado y los que aporté en mi peritaje, el número de mujeres y niños fue muy elevado y los insultos, vejaciones y violaciones, enormes, así como el desplazamiento masivo de la población, en su mayoría indefensa y desarmada. El plan de campaña “Firmeza 83” mencionaba, entre los objetivos de la estrategia militar, “integrar a toda la población, aislándola física y psicológicamente de las bandas de delincuentes subversivos”, para su “control físico y psicológico”.

El genocidio no es simplemente un acto exterminador aislado contra un pueblo o grupo religioso, sino un proceso paulatino de destrucción de los sujetos y deshumanización de las víctimas hasta llegar a su exterminio físico

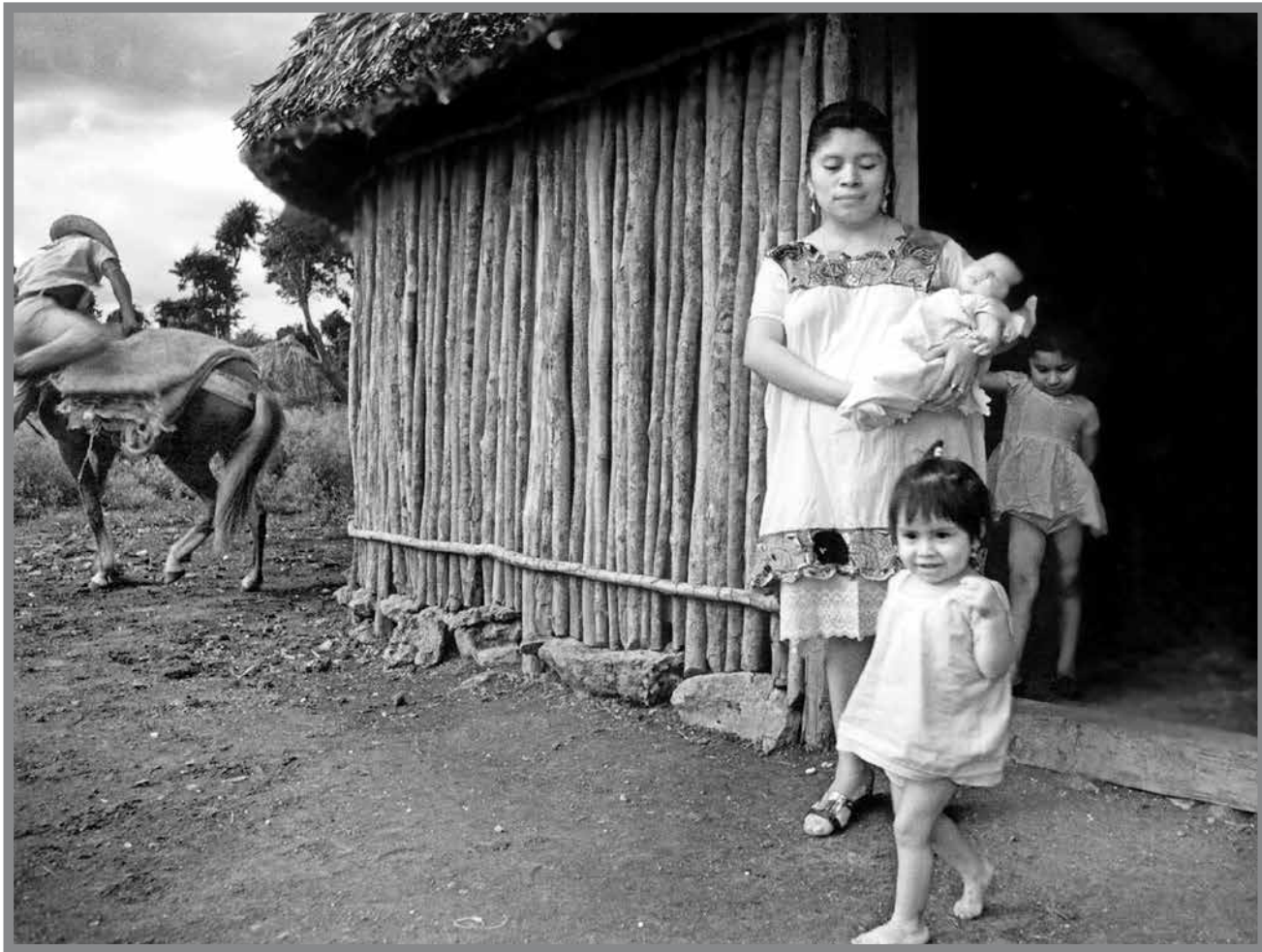
El proceso de exterminio fue de una violencia letal y rápida, como se puede ver en las operaciones Gumarcaj o Xibalbé, donde se observa una protocolización de la violencia hacia mujeres, ancianos y niños, que indica el propósito de destruir a un grupo étnico como tal. Ese protocolo puede observarse en testimonios reiterativos de las víctimas, donde todas las masacres se inician y terminan de forma muy similar. Los soldados llegaban a la aldea, dividían a la población en hombres jóvenes, maduros y viejos, interrogaban a los jóvenes si eran guerrilleros y ante la respuesta negativa pasaban a asesinarlos con armas de fuego, machetes o de formas más violentas, como sacarles el corazón, en un canibalismo ritual como indica la CEH en sus conclusiones. Posteriormente encerraban a las mujeres en las iglesias, sus casas o la municipalidad. Después de atarlas y violarlas eran quemadas, y posteriormente se incendiaba el pueblo con bombas. A niños, mujeres y ancianos se les infringían muertes espantosas como quitarles las cabezas y ponerlas sobre las mesas del comedor, empalarlas; cuando estaban embarazadas, extraerles al niño para “reventarlo” contra los árboles.

Esta protocolización de la violencia y el exterminio en aldeas y caseríos, seguido de la quema de sus enseres, animales y el asesinato indiscriminado y arbitrario de mujeres, ancianos y niños, como hemos escuchado repetidamente en los testimonios, está descrito en casi todas las masacres y se constata en el Plan Sofía, que los contabilizaba como animales o cosas, y a los niños se les llamaba “chocolates”.

Esta tercera fase, la del genocidio o exterminio de un grupo étnico como tal, en el caso del pueblo ixil, fue en donde se produjeron todas las atrocidades que hemos venido escuchando a lo largo del juicio contra el ex dictador. La protocolización era muy similar en todos los casos, lo cual indica una vez más el propósito, como dice el código penal guatemalteco, de cometer un genocidio contra un grupo étnico.

La cuarta y última fase de la desidentificación, deshumanización o desvalorización del otro como animal, conlleva una fuerte carga de racismo y estigmatización como inferior, prescindible, y encima mujer. El debilitamiento sistemático de su identidad étnico-cultural, el resquebrajamiento psíquico, el deterioro mental, la humillación y vejación de los sobrevivientes, es uno de los efectos del racismo y el genocidio como dos caras de una misma moneda ☞

Marta Elena Casaus Arzú fue negociadora de la oposición guatemalteca durante el conflicto, y participa como perita en el accidentado juicio que se sigue a los generales de la dictadura. Allí demostró que el racismo de Estado justificó las acciones militares, al catalogar a muchas comunidades ixiles como “enemigo público”.



Jacinta Chi Tun a la puerta de su casa, Monte Cristo, Yucatán, 1971. Fotos: Macduff Everton

# HACIA LA RENOVACIÓN DEL CONSENSO “NO PODEMOS DAR LUGAR AL JUEGO DEL GOBIERNO”: CRAC-PC DE GUERRERO

✂ Gloria Muñoz Ramírez y Jaime Quintana Guerrero ✂

LA COORDINADORA REGIONAL de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero se encuentra en un proceso de reflexión interna en el que está en juego el camino que seguirá una de las organizaciones de seguridad y justicia autónomas más notables del país, y que depende en gran medida del modo en que se relacione con los gobiernos estatal y federal.

Desde hace dos años, señala en entrevista Valentín Hernández, asesor de los comunitarios, “se plantea la necesidad de revisar la estructura de la CRAC para formalizar lo que ya se está haciendo en áreas distintas a las seguridad y justicia”. Por un lado, indica, “estamos ante una organización comunitaria que ejerce justicia, y que debe consolidarse con un modelo de gobierno propio, desde los pueblos, que tenga que ver con áreas de desarrollo tales como la salud, la comunicación y la producción, aspectos en los que ya se trabaja aunque no formalmente, pues no existe aún la discusión de fondo”.

En estos momentos, reflexiona Hernández, “en los hechos se está dando la revisión del reglamento interno y la incorporación de nuevas comunidades y regiones, pero hace falta la posición de la CRAC en relación con los gobiernos del estado y federal”.

Es justo la manera en que se relaciona esta organización autónoma con las instituciones del Estado lo que está en juego. Para algunos, explica el asesor, esta relación “no debe ser determinante en el desarrollo, sino sólo un elemento que debe tomarse en cuenta, sabiendo que no es el único y que no debe determinar la conducción de la organización, de lo que se haga o se deje de hacer”.

Al interior de la Policía Comunitaria, sin embargo, existen otras posturas. Y una es que la CRAC debe estar sujeta al gobierno del estado y a lo que conceda el gobierno federal. “Esta es una discusión que se está dando”, reconoce el entrevistado.

La reestructuración, la revisión del reglamento y la ampliación de las regiones son temas que se abordarán en las próximas asambleas, en las que también se fijará una postura frente a los gobiernos estatal y federal y se discutirá la participación de la Policía Comunitaria dentro del Movimiento Popular de Guerrero, tema en el que tampoco hay consenso.

La Policía Comunitaria de Guerrero nació hace 17 años en La Montaña y en la Costa Chica de Guerrero. Actualmente tiene presencia en más de cien comunidades atendidas por cuatro Casas de Justicia, y cada vez amplía su margen de acción. De la persecución de delincuentes comunes pasó a la lucha contra el narco y, lo más importante, a la defensa del territorio en contra de las empresas mineras. Recientemente se unió a la lucha del magisterio del estado en contra de la reforma educativa, y éste es precisamente el contexto en el que el pasado 6 de mayo elementos del ejército, la Marina y la Policía Federal, detuvieron a dos integrantes de la Coordinadora y a cuatro policías comunitarios.

“Ésta es una agresión al sistema de seguridad comunitario por apoyar al magisterio, que permite ver que el gobierno de Guerrero y el gobierno federal actúan con la lógica de golpear y deslegitimar a la organización, buscando su desarticulación”, denuncia Valentín Hernández. Lo que les importa, dice, “es tener el campo libre para implementar los megaproyectos de despojo y saqueo”.

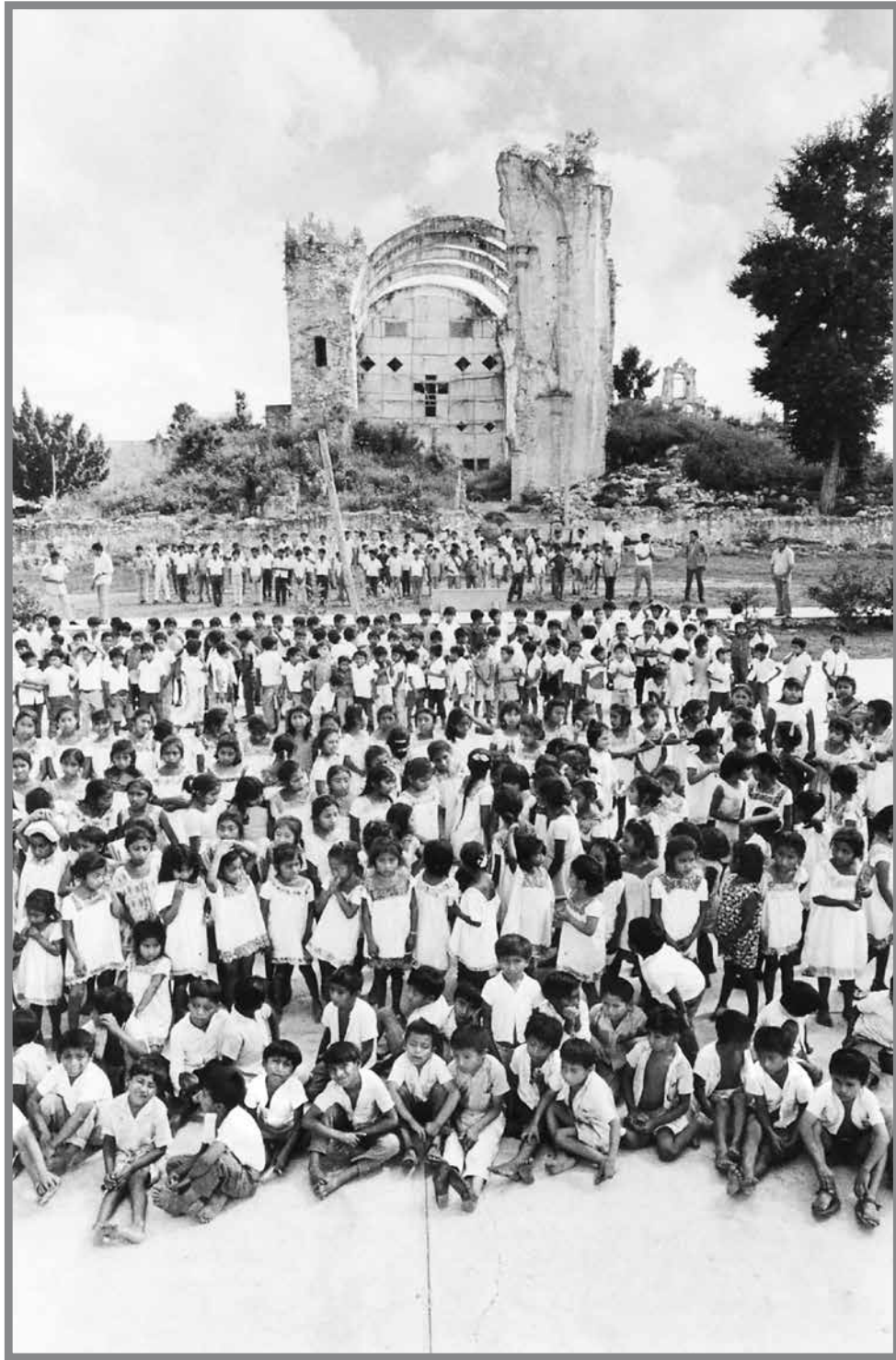
La CRAC no tiene un pensamiento único, lo que puede fortalecerla si se toman como base los acuerdos de las asambleas regional y microregionales. Frente a la represión, debe destacarse, la postura es única pues, indican, “no podemos dar lugar al juego que quiere el gobierno”.

En estos momentos los retos de la CRAC, en opinión de Hernández, son mantener la integridad de la organización, fomentar la discusión, buscar salidas alternativas a las diferencias y caminar juntos. “Y a nivel externo caminar de manera conjunta con otros movimientos, pues tenemos un respaldo jurídico y social, y somos una autoridad moral para algunos movimientos”. Por eso, indica, “vamos a seguir apoyando al magisterio, pues es una decisión mayoritaria, y vamos a seguir con el Movimiento Popular de Guerrero”.

## Nuevos golpes a las organización interna

El pasado 6 de mayo fueron detenidos por elementos de la Marina, el ejército y la Policía Federal, los coordinadores regionales Raúl de Jesús Cabrera y Eliseo Villar Castillo, y los policías comunitarios Iván López González, Leonel Vázquez Leal, Israel Reyes Cruz y Fermín Raymundo Martínez. La respuesta de la CRAC fue la movilización inmediata exigiendo su libertad.

Un dato que resalta es que precisamente Eliseo Villar Castillo y Raúl Cabrera de Jesús, coordinadores de la sede de San Luis Acatlán, anunciaron en días pasados que el gobernador Ángel Aguirre insta-



Estudiantes en Tihosuco, Quintana Roo, 1971

La Policía Comunitaria de Guerrero nació hace 17 años en La Montaña y en la Costa Chica de Guerrero. Actualmente tiene presencia en más de cien comunidades atendidas por cuatro Casas de Justicia, y cada vez amplía su margen de acción

laría la primera piedra para la construcción de la Casa de Justicia, hecho que motivó una fuerte discusión al interior de la organización. Lo curioso es que justo estos dos representantes fueron aprendidos por el mismo gobierno.

La detención se llevó a cabo cuando Villar y Cabrera viajaban a Acapulco para realizar análisis clínicos a dos menores intoxicados con ervantes. Las autoridades comunitarias desde siempre han viajado para hacer este tipo de investigación fuera del territorio comunitario.

Para Hernández, con esta acción “ya se está aplicando el decreto del gobierno que fue rechazado por las comunidades, y que consiste en no dejar que los pueblos ejerzan la justicia en sus pueblos”. Esto, agrega, como parte de “una práctica del gobierno de Aguirre que habla, engaña, utiliza y encarcela. Ya lo vimos con los estudiantes de Ayotzinapa, y con los maestros”.

El comunicado de la CRAC advierte que “es clara la intención y objetivo de desarticular nuestra institución comunitaria, reprimiéndola, hostigándola, orillando a nuestros pueblos a asumir una posición defensiva”. Se trata, indican, de desconocer el trabajo de la policía comunitaria “que en los últimos 17 años ha resuelto de manera eficaz el problema de la inseguridad y la justicia en la región de La Montaña y la Costa Chica” ☞



# LA ÚNICA LUCHA QUE IMPORTA

✧ Vandana Shiva ✧

**S**OLAMENTE HAY UNA lucha hoy en el mundo, que es por la tierra y por la vida en todos sus aspectos —incluyendo a la vida humana. Cuando en 1997 oí a las empresas hablar de introducir los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) para patentar semillas, y de usar a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y al Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT) para impulsarlos en todo el mundo, empecé a guardar semillas. En ese momento dijeron que para el año 2000 todas las semillas serían transgénicas y que cinco compañías controlarían el abasto de alimentos en todo el mundo, pero estamos en 2013 y son pocos los países donde los OGM se han extendido. La mayoría de los países y de los cultivos están libres de transgénicos, así que debemos reconocer el poder de los movimientos para detenerlos hasta ahora.

Necesitamos emprender tres acciones simultáneas. La primera es profundizar las luchas locales mientras las conectamos globalmente, porque ésta es una lucha global. En segundo lugar necesitamos cultivar las semillas locales y mantener a los transgénicos fuera; no son dos cosas separadas, aunque nos hemos especializado demasiado entre los que luchan contra los OGM y los que conservan las semillas.

Hay otro proceso, que es el vinculado a los tribunales populares para exhibir la verdadera naturaleza de instituciones y corporaciones. Monsanto se impone secuestrando las leyes, pero éstas vienen de las sociedades. Cuando los criminales las escriben, son leyes criminales que van contra la gente, la naturaleza, la cultura. Nosotros decimos que los derechos de propiedad intelectual de Monsanto y la OMC son ilegítimos, ilegales y que tienen que someterse a revisión.

**Recuperar el mando.** Llegó el tiempo en el que los ciudadanos debemos recuperar el mando. En México, el reto es doble porque todos los problemas comenzaron al desbaratar el sistema más visionario, que es la propiedad colectiva de la tierra, vista como un bien común. Después de todo, sólo podemos cuidarla cuando asumimos esa responsabilidad de manera colectiva. Pero si reclamamos la tierra como un bien común, también lo debemos hacer con las semillas.

Estamos redactando una nueva ley para fortalecer a las semillas. La semilla nos dice: “quiero multiplicarme y ser compartida”. Esta ley señala que cuidarlas y compartirlas es un derecho y un deber que no puede ser criminalizado. Las leyes de propiedad intelectual no caben aquí. Necesitamos comenzar la reescritura de nuestras leyes, pero para hacerlo necesitamos valor y solidaridad para entender que en última instancia, la medida somos nosotros. ¿Qué son cinco empresas frente a 300 millones de especies? ¿Qué son cinco compañías frente a siete millones de personas?

Por supuesto, para defender la libertad de las semillas debemos aprender lecciones de Gandhi. Él escribió un libro sobre la libertad en 1909, donde señaló que mientras exista la superstición de que la gente tiene que obedecer leyes injustas, la esclavitud permanecerá. Lo que vemos con los transgénicos y las patentes es una nueva esclavitud de los campesinos, de los ciudadanos, de toda la vida en la tierra. La nueva liberación es reconocer que no tenemos que obedecer estas leyes, porque lo que debemos acatar son las leyes superiores de la tierra, de la ética, de la solidaridad, de la justicia y de la democracia, de la ecología.

**La acción directa.** Arrancar los cultivos es efectivo cuando comienzan las pruebas de transgénicos en un país. Esto se hizo, por ejemplo, en Inglaterra, donde las mujeres hicieron una acción bajo el nombre de Snowball (bola de nieve). Cinco de ellas comenzaron y, cuando las arrestaron, cinco más salieron a relevarlas. Al final, la corte concluyó que lo hicieron en defensa propia. De manera similar, en Francia surgió un grupo llamado “los segadores”, que cortaron y destruyeron cultivos experimentales, y aun en ese país la corte dictaminó que fue en defensa propia. Desafortunadamente, en tiempos recientes las cortes en Bélgica legislaron contra facultades y estudiantes de las universidades que arrancaron ensayos transgénicos hechos en papas.

La estrategia de destruir los cultivos experimentales no funciona cuando las empresas ya están en fase de comercialización, porque ya son centenares de millones de acres cultivados con OGM. Después de la fase de pruebas, viene la no cooperación.

Monsanto representa lo peor del poder del patriarcado capitalista; la fuerza para contrarrestarlo tiene que venir de las mujeres indígenas, con su sabiduría de siglos y su cuidado en la conservación de las semillas. Hoy, ellas son el poder que puede parar a Monsanto

**Resistencia efectiva.** Monsanto representa lo peor del poder del patriarcado capitalista; la fuerza para contrarrestarlo tiene que venir de las mujeres indígenas, con su sabiduría de siglos y su cuidado en la conservación de las semillas. Hoy, ellas son el poder que puede parar a Monsanto.

La resistencia más importante contra los transgénicos es la que viene de la cultura, que incluye a la biodiversidad. Una razón es que cambia el paradigma de la discusión. La lleva de las falsas promesas del milagro tecnológico hacia la experiencia vivida, a la riqueza, a los sabores, a las seiscientas recetas que se pueden preparar con el maíz —mientras todo lo que Monsanto puede hacer es transformar al maíz en biocombustible y forraje para animales.

**El ejemplo de India.** Una experiencia de la que todos podemos aprender es la que creamos en India para cambiar las leyes que criminalizan a las semillas locales buscando su registro obligatorio. Las autoridades intentaron legislarlo en 2004, y nosotros respondimos con un movimiento de no cooperación. Dijimos: “no obedeceremos”, y seguimos a Gandhi con la Satyagraha, que significa la fuerza de la verdad.

Las malas leyes no deben ser obedecidas; nunca nos habríamos zafado del racismo, la esclavitud y el colonialismo —que fueron legales— si la no cooperación nos nos hubiera hecho libres. Las patentes, el registro de semillas por parte de las compañías, la aprobación de transgénicos y las leyes de bioseguridad que lo permiten son malas leyes. Lo que funciona realmente es una determinación de no cooperar que venga desde dentro, desde lo más profundo del ser, de las comunidades y regiones comprometidas con esto, y que esas regiones se vuelvan zonas y países. Necesitamos por todos lados zonas libre de OGM y determinación para decir: “nosotros obedecemos a leyes superiores, las que vienen de los ancestros, de la tierra, de la justicia” ☸

Vandana Shiva, premio Nobel alternativo, es una de las caras más visibles a nivel mundial, en defensa de las semillas nativas “libres” y contra los transgénicos.

Entrevista de Adazahira Chávez, con declaraciones en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, en Oaxaca, relativa a la contaminación transgénica del maíz en México.



Diego el chiclero, Tulum, Quintana Roo, 1971.  
Foto: Macduff Everton